

Se ampliaría denuncia contra Ancap

Principio de acuerdo entre cañeros y productores; partidas cuestionadas pagarán aportes

Luego de que se supiera que Alcoholes del Uruguay (ALUR) pagó durante diez años una remuneración a alrededor de 2.500 trabajadores vinculados a la caña de azúcar en el departamento de Artigas por la cual no se realizaron aportes al Banco de Previsión Social (BPS), la oposición se apresuró a anunciar que se analiza incluir la irregularidad en una ampliación de la denuncia penal realizada el año pasado sobre Ancap.

El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, informó a El País que ayer por la tarde se llegó a un preacuerdo que se firmaría hoy de mañana entre los plantadores de caña de azúcar y los trabajadores que implica, entre otros aspectos, que la denominada "partida de fin de zafra" pagará aportes previsionales. A su vez, ALUR firmará un convenio para pagar al BPS retroactivamente los aportes.

El senador nacionalista Álvaro Delgado dijo a El País que la oposición analiza ya dictámenes jurídicos sobre la evasión detectada, y opinó que de ninguna manera se puede sostener, como hizo el senador oficialista Leonardo de León, que los pagos fueron una donación. Las donaciones, señaló Delgado, no pueden realizarse a cambio de una prestación laboral, como ocurrió en esta oportunidad. Delgado opinó también que seguramente los trabajadores ya tienen "derechos adquiridos" y que no deben ser "quienes paguen los platos rotos (...). Todo esto pone otra vez en el tapete la necesidad de regular las sociedades anónimas de propiedad estatal", consideró.

El diputado colorado Walter Verri y el nacionalista Nicolás Olivera anunciaron que convocarán a la ministra de Industria, Carolina Cosse, para analizar el tema. Verri dijo a El País que ALUR "no nos deja de sorprender".



CAÑEROS. ALUR les pagó una compensación extra sin realizar aportes durante una década aunque no era su empleador directo.

UN SECTOR VULNERABLE

■ Un comunicado de ALUR del martes señaló que la partida fue pagada "con el fin de fortalecer e incentivar la productividad en un sector vulnerable del país cuyo ingreso anualizado promedio mensual es de \$ 10.000". Los pagos se realizaban a través de Redpagos, informó El Observador. Raúl Sendic, padre del actual vicepresidente y ex titular de Ancap, organizó a los trabajadores cañeros hace cinco décadas cuando surgió el sindicato UTAA.

der" por su "desprolijidad" y consideró que el dinero volcado fue un salario encubierto pagado en negro.

El senador frenteamplista Leonardo de León, quien presidió ALUR, intentó justificar los pagos y señaló en radio Carve que "no es correcto que no existan registros contables" ya que todo "está registrado como donación (...) ALUR no sé si seguirá dando una donación o si optará por mantener una relación laboral. ALUR tiene un auditor externo y nunca hubo una observación por esta donación", argumentó.

El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, ironizó en Twitter sobre los dichos del senador: "¡No aclare que oscurece! ¿Donaciones? Todos los meses y en función de lo trabajado. Illegalidad flagrante".

Según supo El País, Ancap

elevó una nota al Banco de Previsión Social en la que básicamente "preguntamos qué tenemos que hacer", señaló una fuente de la empresa. La fuente señaló que la situación se detectó hace algunas semanas y que se asume que se deberá afrontar una multa. Se maneja una fórmula que suponga que los trabajadores no pierdan la remuneración que les sería abonada por los productores y ya no por ALUR y que esta, a su vez, compense a los cultivadores para que no pierdan su rentabilidad, explicó la fuente, a la vez que dijo "suponer" que los pagos buscaron evitar paros.

■ GRITO EN EL CIELO. Murro señaló que "se están negociando todos los aspectos, este es uno de los aspectos que se está negociando (...) Lo que está funcionando ahí es un Consejo de

Salarios. Estamos hablando de \$ 7.500 por año por trabajador. Esto es parte del proceso de formalización que se está haciendo en el país, histórica, notable, en el sector privado y en el sector público. Entonces no pongan el grito en el cielo por un tema que, reitero, son \$ 600 por mes. Cuando la Intendencia de Canelones tuvo que hacerse cargo de una deuda por trabajadores en negro, por no verter aportes de US\$ 6 millones de los gobiernos anteriores, eso era una cosa grande e importante", señaló.

"Esto hay que regularizarlo y se va a regularizar. La posición del ministerio es clarísima. La hemos tenido con varios privados que querían hacer partidas sin aportes y el ministerio ha sido tajante en que lo que es salario debe llevar aportes. Se tiene que tratar (a ALUR) como cualquier otra cosa", dijo.

DE ESCÁNDALO EN ESCÁNDALO

EMPRESA EN EL "OJO DE LA TORMENTA"

■ ALUR, la subsidiaria de Ancap dedicada básicamente a la producción de biocombustibles, ha estado en el tapete por varias irregularidades. Por un lado, Ancap apartó de su cargo a tres funcionarios por pagar US\$ 100.000 en lugar de \$ 100.000 a un proveedor. También hay dudas que se investigan sobre el costo de la planta sanducera de fabricación de bioetanol que tiene ALUR. Además, el año pasado su gerente Manuel González fue removido luego de que el Ministerio de Economía cuestionara un convenio salarial que él había suscrito y que consideró demasiado generoso. ALUR tiene como único cliente para sus biocombustibles a la propia Ancap que se los paga por encima de la paridad de la importación, algo que la oposición considera que es un subsidio encubierto. Desde 2006 Ancap condonó US\$ 22 millones en deudas de ALUR y la capitalizó por US\$ 129.095 millones, de acuerdo con información que entregó el Ministerio de Industria al diputado blanco Pablo Abdala. Ese subsidio encubierto, según el legislador, equivale a US\$ 160 millones anuales. ALUR tiene además dos plantas de biodiesel en Montevideo, un "complejo agroenergético en Bella Unión" y una microdestilería en Artigas. Su capitalización inicial fue de US\$ 2,4 millones.

Presidenta de gremio de fiscales acusa a colegas de “escrache”

Dora Domenech dijo que “no son representativos”

La presidenta de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Dora Domenech, se mostró molesta ante una carta de un grupo de 17 fiscales que la acusaron a ella, y al vicepresidente de dicha gremial, Gustavo Zubía, de adoptar posiciones “radicales y represivas”.

La máxima autoridad de la gremial de fiscales dijo a *El País* que lo expresado por el grupo de fiscales que firman la carta “no representa la posición general de la Asociación de Magistrados Fiscales. “Su posición es para nada representativa, y cae en notorios errores. Suena más a un escrache que a un intento de solucionar problemas internos”, dijo Domenech.

La fiscal explicó que la gremial agrupa a cerca de 300 fiscales y está trabajando en diferentes temas con total transparencia. Actualmente la interna de la gremial de fiscales está dividida por la Ley Orgánica del Ministerio Público. Esta norma brindará potestades al fiscal de Corte para dar directivas generales a los fiscales a partir de la puesta en funcionamiento del nuevo Código de Proceso Penal que aún no entró a regir.

En la carta los fiscales fir-

mantes advierten de “una actitud excluyente y de inaceptable diferenciación entre asociados”.

“No se vislumbra razón pertinente que explique el proceder de la Comisión Directiva. Cada asociado debe tener el mismo e igualitario derecho de participación en las discusiones que se den en el seno del gremio y que le atañan”, expresa el texto al que accedió *El País*.

Domenech dijo que “eso no es cierto” y que desde la dirección se adoptó un mecanismo de consulta más efectivo para evitar disertaciones interminables que no son productivas.

Por eso se dispuso trabajar en comisiones y luego enviar un representante de cada grupo a la discusión general.

“Eso fue consensuado y entendido como más efectivo por la Asociación de Magistrados. La posición de los firmantes de la carta es fuera de lugar y su molestia no fue remitida en la interna”, dijo la presidenta de la gremial.

Los fiscales que firman la carta enviada al fiscal de Corte, Jorge Díaz, sostienen que se quejaron del “temperamento” de la Comisión Directiva del gremio. “En especial de su Presidenta y Vicepresidente”, señalaron. Domenech dijo a *El País* que siempre han trabajado con total transparencia y efectividad, y nunca han recibido cuestionamientos sobre su tarea en la interna de la gremial.

“Suena más a escrache, que a buscar solucionar diferencias”.

Más salado que dulce

Locutores deportivos denuncian informalidad, deudas laborales y amenazas

ASIENTOS INCÓMODOS, ruidos dañinos para la salud, agresiones de los hinchas, amenazas verbales de sus empleadores, informalidad y deudas. Los locutores deportivos comerciales, afiliados a la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), denunciaron el lunes todas estas situaciones ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. "Hay una informalidad muy grande en todo el sector radio. Hay compañeros a los que hace dos años les deben el salario y el aguinaldo vacacional, y a otros les deben cinco meses de sueldo", contó a *la diaria* Darío Luis Gregores, integrante de la Agrupación de Locutores Deportivos del Uruguay (ALDU).

A esto se suma que en los escenarios deportivos, con frecuencia los locutores reciben agresiones por parte de los hinchas: "Rompen vidrios de la cabina, les quieren pegar", contó Gregores. Los trabajadores también reciben

amenazas de sus empleadores, que ante la eventualidad de una denuncia por malas condiciones laborales, les recuerdan que pueden poner a cualquier otra persona en su lugar. "La inestabilidad laboral siempre está presente; pueden colocar a cualquier persona que no sea locutor comercial, porque no está reglamentada la profesión", señaló el dirigente gremial. A pesar de esta situación, recordó que en los Consejos de Salarios la actividad de locución deportiva está reconocida como categoría.

Informalidad

La organización de locutores está en coordinación con el Instituto de Empleo y Formación Profesional (Inefop) para realizar un reconocimiento de saberes a los locutores más antiguos, y con la UTU para validar sus saberes. "Queremos poder enseñar la profesión, para que no pongan a

cualquiera a hacer cosas que no debe", explicó Gregores.

La comisión recibió los planteos de los trabajadores y pidió que se envíen las actas al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Además, solicitó a la cartera que realice inspecciones para constatar las condiciones de seguridad y salubridad de la actividad. "[Los trabajadores] denuncian una si-

tuación extendida de trabajo en negro e informalidad, y hay denuncias muy graves en materia de salud laboral y condiciones de trabajo: ausencia de instalaciones adecuadas para desarrollar la tarea, pasar horas sentados en asientos totalmente inadecuados, expuestos a ruidos intensos", enumeró el diputado frenteamplista Luis Puig.

La agrupación reclama reglamentar la actividad del locutor deportivo mediante una ley, garantizando condiciones mínimas de salud y seguridad. Puig consideró que puede ser necesario legislar, pero recordó que ya existe normativa que ampara a los trabajadores en esta materia y que se está "violando flagrantemente por parte de las emisoras". ■

ENCUESTA. EL INFORME SOBRE LAS EXPECTATIVAS EMPRESARIALES FUE REALIZADO POR LA EMPRESA DELOITTE

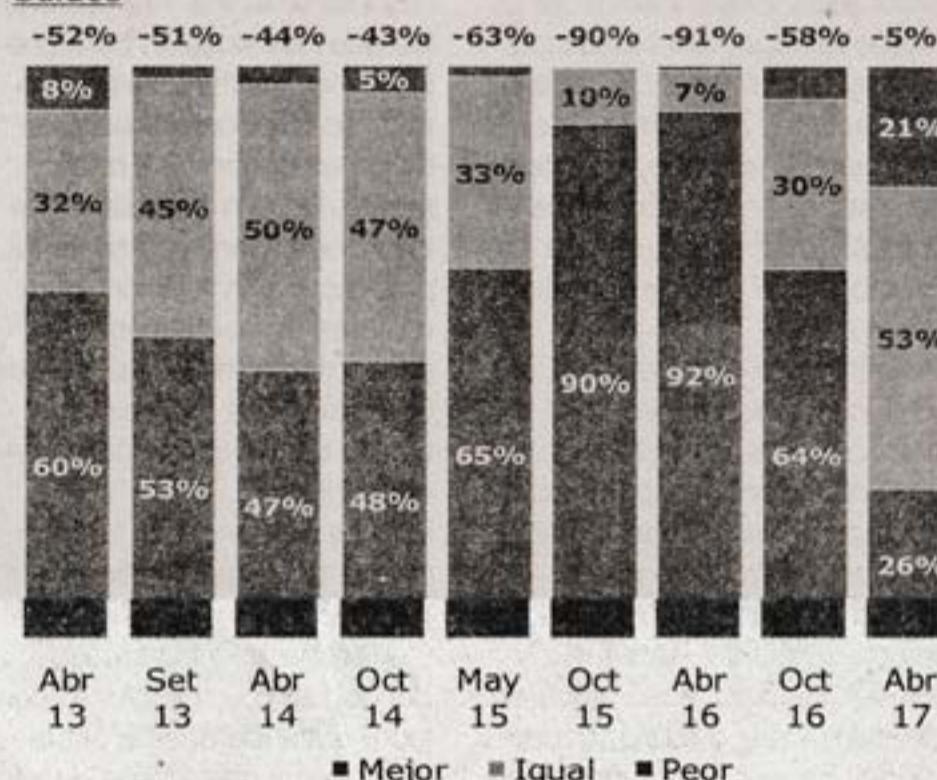
Se triplicaron empresarios que ven mejor la economía del país

Se mantiene la tendencia positiva que ya observara en estudio efectuado en octubre de 2016.

Situación económica frente a 1 año atrás

% de las respuestas

Saldo

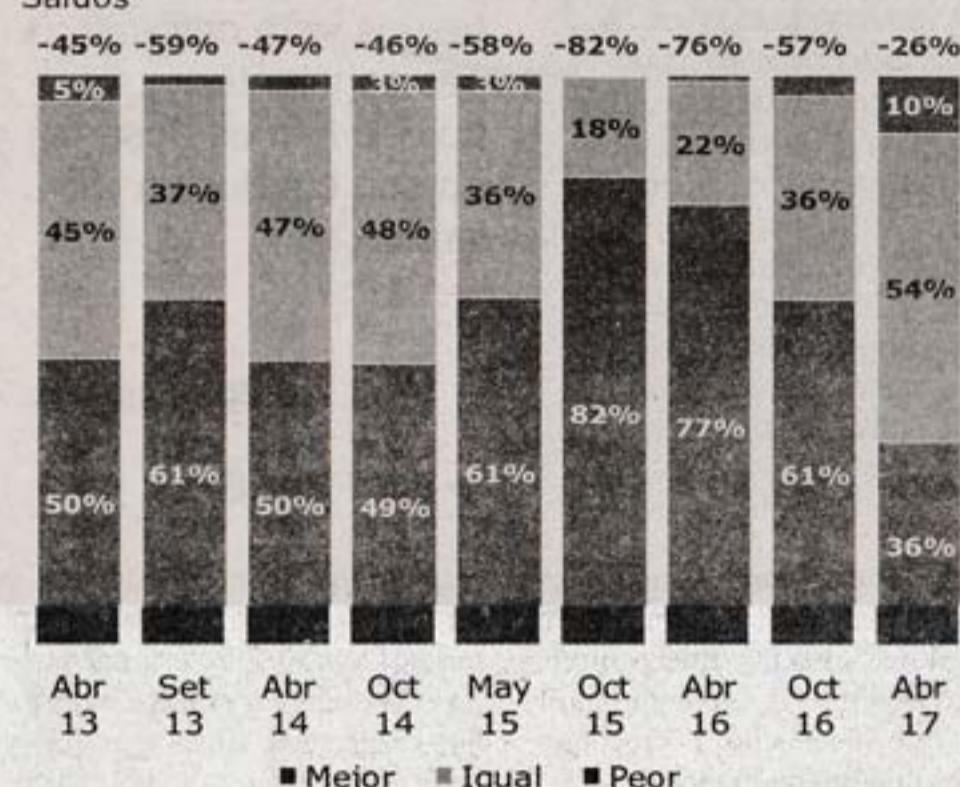


■ Mejor ■ Igual ■ Peor

Clima de inversiones frente a 1 año atrás

% de las respuestas

Saldo



■ Mejor ■ Igual ■ Peor

DESEMPEÑO MACROECONÓMICO RECIENTE Y PERSPECTIVAS. El sondeo concluye que se consolida la percepción de un mejor 2017.

Los resultados de la última edición de la Encuesta de Expectativas Empresariales, reflejan una visión algo más favorable del desempeño reciente y las perspectivas económicas en Uruguay, consolidando la mejora que se había observado en la edición de octubre de 2016, según informaron a LA REPÚBLICA desde la empresa Deloitte, que llevó a cabo este sondeo, el 15º que lleva realizados.

Dicho relevamiento fue efectuado entre el 28 de marzo y el 20 de abril de 2017 a 316 gerentes y altos ejecutivos de empresas que operan en el país.

En particular, en esta edición volvieron a bajar los juicios negativos sobre la evolución de la situación económica en el último año (desde 64% hasta 26%), al tiempo que la proporción que indicó una mejora pasó de 6% a 21%, alcanzando el valor más alto desde inicios de 2011. El restante 53% opinó que la situación fue igual que hace un año.

En una línea similar, la presente edición del estudio registró un aumento en la proporción de empresarios con juicios favorables sobre el clima actual de negocios en nuestro país.

En efecto, la proporción de respuestas que apuntan a que

► EL DATO

Producción a la alza

Las expectativas de producción también resultaron mejores, al reportarse un 36% que espera una mayor producción el próximo año, un 54% que no aguarda cambios y un 9% que avizora una producción más baja.

el clima de negocios es "bueno" o "muy bueno" se incrementó hasta 30%, luego de haberse mantenido en torno a 18% en los últimos tres relevamientos.

"De todos modos, siguen predominando juicios relativamente críticos en relación al clima de negocios (la mayoría de las respuestas - 60% - sostiene que es "regular").

Por otra parte, las expectativas económicas para el próximo año siguieron mejorando. La proporción de consultados que prevé un deterioro de la situación económica cayó de 26% a 14%, el menor registro desde 2010, mientras que el porcentaje que espera un panorama "igual" se incrementó 9 puntos y alcanzó a 56%.

Las opiniones que apuntan a una mejora de la situación económica también aumenta-

ron, aunque en menor magnitud (de 27% a 30%). Así, el saldo neto de respuestas ascendió hasta 16%, cuando en octubre este había sido casi nulo.

Positivos también en las inversiones

Las expectativas en torno al clima de inversiones también presentaron mejoras aunque algo más moderadas, con lo cual el saldo neto de respuestas permanece en terreno levemente negativo. A su vez, dos de cada tres empresarios espera que el clima de inversiones permanezca sin cambios.

Con respecto al PIB, casi un 70% de los empresarios espera un crecimiento de entre 1% y 2% en 2017, cifra que supone un repunte frente al 43% obtenido en la edición pasada, añadieron desde Deloitte.

Además, el porcentaje que prevé una expansión menor a 1% cayó a menos de 20%, cuando en octubre de 2016 la mitad de los empresarios proyectaban este escenario. Cabe igualmente marcar que el crecimiento promedio esperado (1,5%) siguió siendo bajo e inferior a las previsiones de la mayoría de los analistas).

Finalmente, las perspectivas para el mediano plazo ("tres o cuatro años") también resultaron un poco más favo-

rables. En particular, la proporción que aguarda un crecimiento de 2%-3% aumentó 10 puntos y alcanzó a 43%, al tiempo que bajó de 55% a 43% el porcentaje que espera un crecimiento de 1%-2%.

Inflación

En un contexto en el que la inflación viene cediendo desde hace ya varios meses, las expectativas inflacionarias volvieron a moderarse. En efecto, el porcentaje de ejecutivos que espera para el cierre del año una inflación de 9%-10% bajó de 42% a 15%, al tiempo que aumentó de 7% a 33% la proporción que la ubicó en 7%-8%. Sin embargo, sólo un 5% piensa que la inflación cerrará dentro de los niveles actuales (6%-7%). En una línea similar, la inflación promedio esperada para el próximo año continuó moderándose, desde 9,2% en octubre hasta 8,1% en la presente edición.

Para el mediano plazo ("tres o cuatro años") también se constató cierta moderación de las expectativas inflacionarias, aunque dos de cada tres ejecutivos igual considera que los precios minoristas aumentarán por encima del techo del rango meta (7%). Esto sugiere que la meta oficial de inflación sigue sin operar del todo como "ancla" de las expectativas inflacionarias.



EL PIT-CNT Y EL FIN DE LA CLASE OBRERA

La editorial de voces del jueves pasado es casi una alusión personal y me asiste la identidad del semanario en el derecho a réplica.

El acto del 1º de mayo marca la agenda de mi identidad, me encuentro con mis memorias, mis compañeros, los afectos y las ideologías, donde las discrepancias me enfrentan con las contradicciones. Los que luchamos por correlaciones de fuerzas que democratizan la realidad, no renunciamos a las organizaciones sociales como las herramientas de un camino crítico donde los principios definen el propósito. El Pit-Cnt es la organización de los asalariados sindicalizados que opera como crisol del movimiento social, que unidos en la diversidad, instalan relaciones democráticas que asumimos limitadas por los intereses corporativos. El Pit-Cnt no es la clase obrera, es la unidad del movimiento social con la impronta del discurso reivindicativo de la clase obrera. Las reivindicaciones convocan, movilizan y es en las calles donde la gente se vuelve protagonista de las libertades.

La comprensión del pasado como proceso de cambios, nos ayuda a asumir el futuro con sus transformaciones estructurales. El modelo industrial se caracterizó por la identidad de clases antagónicas, dueños de los medios de producción y fuerzas laborales que juntos desarrollan el capitalismo. La clase obrera nace, crece y se proyecta en ciudadanos con derechos adquiridos y capacidad de consumir y educarse para ser otra clase. Como ejemplo están quienes logran un título o un cargo político cambiando su sentido de pertenencia, se sienten "clase media" o "clase política" y funcionan como tal. El capitalismo implica relaciones de mercado sostenido por la competencia y el consumo donde producir aplicando tecnología, suprime costos y clases. El objetivo del poder hegemónico no es mantener "el ejército del proletariado con la clase que lo sepulta". La dinámica de transición como lo permanente, en la sociedad intercomunicada, cambia los tiempos sociales. El corto, mediano y largo plazo que pautaban las reivindicaciones, se transformó en un anacronismo político. La disputa es por la gestión en tiempo real y el liderazgo de la izquierda está en la innovación para consolidar el doble poder en el diseño de reformas y proyectos de inclusión solidaria que democratizan la economía.

La pregunta de rigor es si existe una agenda anticíclica para la transición, ¿quién va a pagar la seguridad social con sus sistemas de salud mercantilizados?, cuando estamos lejos de reducir la jornada laboral e implementar la renta básica tomando recursos de la gestión eficiente o la renta tecnológica.

El mercado como una superestructura global de la logística integral e integrada del sistema financiero se apropia de la innovación y la inteligencia concentrando la renta tecnológica con una polarización de la riqueza, sin precedente.



La autogestión de eco-economías democráticas con poder ciudadano se vislumbran en la praxis de la sociedad alternativa. Los desplazados de la renta tecnológica, no renuncian a explorar la calidad de vida en redes generando mercados de renta básica sustentable y precios justos.

El movimiento pendular de las sociedad intercomunicada no queda anclado en el pasado, supera los anacronismos ideológicos de la lucha de clases reivindicativa, limitada a relaciones de dependencia, generando acciones proactivas de autogestión colectiva con corrientes más dinámicas de convocatorias en redes espontáneas y puntuales que están rediseñando la democracia como poder ciudadano.

Deberíamos reflexionar sobre la economía de inclusión colectiva y solidaria en la transición a la sociedad interactiva de la robótica y la gestión inteligente. La sociedad se comunica en tiempo real con imagen y sonido, descargando aplicaciones en función de motivaciones y necesidades que revolucionan las relaciones de producción. La autogestión colectiva en plataformas de logística integral interactiva, rompe la lógica de la instancia presencial que definía el contrato laboral y el trabajo como un vínculo delimitado por las horas, en un lugar donde se debe "marcar tarjeta". Nuevas relaciones sociales con viejas necesidades básicas, reprograman las teorías manteniendo las mismas contradicciones entre la concentración y distribución de la riqueza social como calidad de vida, apostando a la interacción de los ciudadanos que resuelven la materialidad en armonía con el medio ambiente. Se convoca a la unidad políti-

ca, en la identidad cultural de eco-economías de inclusión solidaria, para que los cambios estructurales que generan la inteligencia artificial y la robótica sean oportunidades para el desarrollo humano.

La transición eco-económica pasa por la comprensión de los procesos históricos que permiten avanzar en democracia, dando continuidad a la seguridad social financiada por el trabajo y las rentas captadas por los estados. El trabajo con seguridad social es un derecho ciudadano asumido como base material del contrato social en procesos llenos de avances y retrocesos, donde el miedo y la falta de certezas son el denominador común.

La voluntad de cambios expresada en las urnas y el plan estratégico de los gobiernos progresistas, es antagónico al modelo anacrónico de gestión burocrático y corporativo del estado. Queda claro el divorcio del corporativismo burocrático que usufructúa la institucionalidad y el programa político para el desarrollo de una economía de inclusión democrática y solidaria.

Reivindicar relaciones de clase, sostenidas artificialmente por los grupos corporativos que toman los gobiernos de izquierda para hacer reformas en "combos" donde salarios y cargos vitalicios se digitán en las corporaciones que controlan las instituciones y el estado restaurando el pasado, consolidan el poder de las derechas.

Los asalariados del estado, con derechos adquiridos, tienen las certezas de una "renta básica". Esto, genera realidades diferentes a los de la actividad privada. Pero los cambios tecnológicos no solo impactan en los puestos labo-

rales de los trabajadores industriales, los cargos públicos de "la burocracia del papel" se caen en un mundo donde las relaciones de dependencia tienden a desaparecer, regulando las relaciones salarios-producción como "inclusión financiera", donde la transacción es una relación ingreso-egreso y aportación fiscal.

La "renta básica" del mundo del papel con siglos de historia se vuelve obsoleta en el estado digital con plataformas inteligentes. Los "escribas del poder" ejércitos de burócratas asalariados en las corporaciones del estado construyeron un mundo de papel, para dictar las normas de la institucionalidad y acompañar la alternancia electoral, asimilando los funcionarios del gobierno o poder de turno.

Junto con el papel tienden a desaparecer los costos sociales de la burocracia, la historia es digital y en tiempo real, la relación interactiva entre los ciudadanos y las plataformas digitales cambia la lógica de la gestión. Una aplicación para cada necesidad es una solución para cada problema, la inclusión informática es trabajo y conocimiento circulando en las redes.

Asumimos que "la gestión separa a los líderes de los charlatanes", cuando en escenarios de alternancia electoral políticamente se repite que las "utopías sirven para avanzar" y nos preguntamos hacia dónde.

Con preocupación desde un enfoque diferente donde las discrepancias son aportes, confirmo mi identidad en la unidad del movimiento sindical que convoca a los ciudadanos a avanzar en un programa democrático de transformaciones sociales. ◀